



GICJ NEWSLETTER - ENERO 2023

INFORMES DEL GICJ

GENEVA INTERNATIONAL CENTRE FOR JUSTICE

International Day of Holocaust Remembrance

27 January



UNITED NATIONS



We remember today and always



Contáctenos



Postal Address

P.O. Box: GICJ 598 Vernier CH- 1214 Geneva Switzerland

Office Address

The Ecumenical Centre 150, Route de Ferney CH 1211 Geneva 2 Switzerland

Telephone

022 788 19 71

Email

info@gicj.org

Website

www.gicj.org

Tabla de Contenidos

TEMA	PÁGINA
Contáctenos	2
Artículos de Actualidad	
Devastador ataque a los derechos de la mujer en Afganistán	4
Libia: Experta de la ONU recomienda emendar la legislación para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas	5
La indiferencia mundial ante el aumento del genocidio	7
Se elimina la libertad de culto y hay una obsesión por la estabilidad política en Vietnam	10
La justicia griega archiva el caso contra los trabajadores humanitarios que rescataban a migrantes	12
La sentencia de Jimmy Lai y el deterioro de la libertad de expresión en Hong Kong	13
Quiénes somos	14

Devastador ataque a los derechos de la mujer en Afganistán

POR SASHA GRANELLI/ GICJ
TRADUCCIÓN ISABEL GARCÍA AGUILAR / GICJ



[Acceso al informe en inglés aquí](#)

Desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, las mujeres y niñas han visto cómo sus derechos y libertades se han reducido drásticamente. Estas violaciones llegaron a un punto de no retorno el 20 de diciembre de 2022.

El ministro talibán de Enseñanza Superior envió una carta a todas las universidades en la que se tomaba la decisión de vetar el acceso a las mujeres acceder a la educación superior de manera indefinida, lo que refuerza la exclusión de las mujeres y niñas de la sociedad afgana, que ya había comenzado con la prohibición del acceso de las niñas a la educación secundaria.

Asimismo, algunas mujeres que ocupaban un puesto de trabajo en el gobierno han sido expulsadas de este o están recibiendo un salario reducido para quedarse en sus hogares. Debido a la presión que viven actualmente las mujeres, muchas periodistas han dejado sus trabajos o han abandonado el país, se han cerrado muchos medios de comunicación y se han encarcelado a periodistas.

De manera parecida, muchas organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales han tenido que suspender sus programas en Afganistán porque el ministro afgano de Economía ordenó que todas las ONG dejaran de trabajar con mujeres a riesgo de ver suspendidas sus licencias para operar.

El ministro afirmó haber tomado dicha decisión tras haber recibido quejas de que las mujeres que estaban trabajando allí no llevaban puesto hiyab (en Afganistán, las mujeres deben llevar cubierto la cara y todo el cuerpo).

Ya que la participación de las mujeres es fundamental, será muy difícil que muchas ONG continúen proporcionando ayuda humanitaria independiente y equitativa si las autoridades no anulan esta decisión; lo que podría tener un efecto devastador en una economía afgana ya debilitada. Según la ONU, más de la mitad de los 38 millones de personas que viven en el país necesitan ayuda humanitaria durante el invierno.

A pesar de su prometida flexibilidad, los talibanes siguen multiplicando las medidas liberticidas, especialmente aquellas contra las mujeres, quienes han sido excluidas de la vida pública, la educación secundaria y, ahora, las universidades. Estas acciones separan todavía más al país de la comunidad internacional, que continúa condenando estas terribles violaciones.



Geneva International Centre for Justice (GICJ) condena este retroceso de los derechos de las mujeres y niñas. Pedimos a la comunidad internacional que reaccione a dichas violaciones y las condene con vehemencia. La comunidad internacional debe tomar medidas efectivas para presionar a la autoridad de facto para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y conceder a mujeres y hombres el mismo acceso a sus derechos de manera justa e igualitaria.

Libia: Experta de la ONU recomienda emendar la legislación para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas

POR KIYANA NEWELL / GICJ

TRADUCCIÓN ISABEL GARCÍA AGUILAR / GICJ



[Acceso al informe en inglés aquí](#)

El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Libia invitó a Reem Alsalem el 14 de diciembre de 2022 al país para que evaluase la violencia contra las mujeres y niñas durante una visita de ocho días. Alsalem se marchó de esta “sintiéndose profundamente preocupada por la grave, sistemática y generalizada violencia a la que se enfrentan las mujeres y niños libaneses, incluidas las niñas” [1]. Debido a la inestabilidad política en Libia y al marco jurídico actual, el gobierno no puede mantener su compromiso internacional con los derechos humanos para que la ley reconozca como iguales a todos los libaneses y estos puedan disfrutar de los mismos derechos civiles y políticos.

La experta de las Naciones Unidas recomendó que la reforma de la legislación de Libia incluyese mecanismos de prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres y niños, el fin de la impunidad y el apoyo de oportunidades que favorezcan la participación económica y política de las mujeres [2]. Para garantizar la justicia de las víctimas de violencia, es fundamental tratar la impunidad generalizada que hay en los procesos políticos libaneses. La legislación adoptada para acabar con la violencia contra las mujeres y niños deberá contemplar tanto a las mujeres con nacionalidad libanesa como a las que no la tienen, para así poder dirigirse a todos los frentes en los que la violencia está presente.

Alsalem visitó el país entre el 14 y el 21 de diciembre de 2022 para examinar las causas sistemáticas de violencia contra las mujeres y los niños. Su prioridad fue centrarse en las mujeres nacionales, las refugiadas, las solicitantes de asilo y otras mujeres y niñas migrantes. En la declaración de la relatora especial se mencionó que el número de feminicidios era alarmante, así como lo era también la violencia física, económica y política contra las mujeres en espacios públicos y privados [3]. Los miembros de la propia familia y ciertas personas relacionadas con las autoridades son quienes cometen dichos actos. Las mujeres que van contra las normas sociales de Libia y que expresan su oposición política tienen un gran riesgo de ser víctimas de un secuestro, tortura, violencia sexual o feminicidio. Además, las mujeres y niñas cuya nacionalidad no es la libanesa también se ven afectadas por los continuos conflictos dentro del país, lo que aumenta el riesgo de actos de violencia sexual por parte de grupos armados, secuestros para obtener un rescate, trata de personas, trabajos forzosos o muertes ilícitas. Asimismo, los centros de detención, en los que se retiene a refugiadas y solicitantes de asilo, emplean a guardas masculinos, lo que aumenta las posibilidades de que las mujeres sufran violencia sexual.



El conflicto en el país comenzó tras el fin del reinado de Muammar Qaddafi durante la revolución libanesa y la campaña de bombardeos de la OTAN en 2011 [4]. Antes de 2021, Libia se dividió en dos administraciones: el Gobierno del Acuerdo Nacional (GAN) y el Ejército Nacional Libio (ENL) [5]. Tras dos rondas de votaciones en las elecciones de febrero de 2021, ENL creó GUN como un gobierno en funciones [6]. Las elecciones para reunificar las instituciones nacionales se pospusieron en diciembre de 2021. Debido al vacío de poder, el poder político de las milicias no controladas está creciendo en el país, lo que está haciendo aumentar el malestar generalizado [7]. La inestabilidad en Libia, el rechazo a la implementación de políticas relacionadas con los derechos de las mujeres y niñas y la continua impunidad han causado que exista un alto riesgo a que se produzca cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas.

Las milicias y las autoridades atacan a las políticas y activistas por sus creencias políticas. Iftikhar Boudra es una mujer que fue atacada y arrestada en Bengasi por su defensa política contra la militarización hace cuatro años. La ONU exigió la liberación inmediata de Iftikhar Boudra y tratamiento médico de urgencia debido a que había sufrido violencia de varias maneras en agosto de 2022 [8]. Siham Sergiwa, miembro electo de la cámara de representantes, fue secuestrada en su casa en Bengasi el 17 de julio de 2019 [9] y se desconocen los detalles de lo que le pasó a Sergiwa. Otras importantes activistas, como Fareeha Al-Berkawi, Intissar Al-Hasaeri, y Salwa Bugaighis, fueron asesinadas debido a sus creencias políticas [10]. La violencia en línea es una nueva forma de incitar el odio y la agresión contra la mujer que busca disuadir a las mujeres de expresar su punto de vista sin reservas. Las mujeres que buscan un cargo político o abogan por este están expuestas a varios tipos de violencia con muy poca protección legal.

El artículo 6 de la Declaración Constitucional de 2011 establece que los libaneses son iguales ante la ley, tienen acceso a las mismas oportunidades y tienen los mismos deberes y obligaciones, sin discriminación alguna [11]. No se ha podido implementar eficientemente esta ley que trata la violencia contra las mujeres y niñas dado el conflicto y la inestabilidad política interna. Tampoco se ha avanzado en el proyecto de Ley para Combatir la Violencia contra la Mujer [12], que penaliza cualquier tipo de violencia contra las mujeres y niñas y refleja responsabilidades institucionales, como el apoyo a las víctimas de violencia y ciertos mecanismos de prevención [13].



Geneva International Centre for Justice (GICJ) condena la violencia y la discriminación contra las mujeres y niños. Asimismo, insta a Libia a enmendar la legislación actual que dificulta los derechos humanos de las mujeres y niñas y a priorizar la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas.

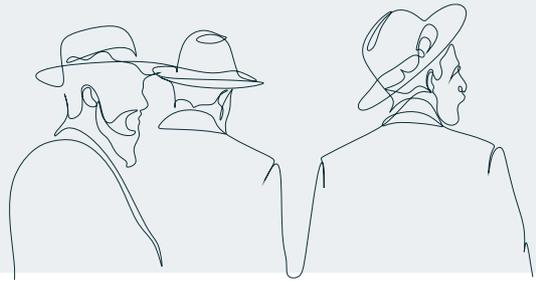
Las reformas políticas deben priorizar la disminución de los niveles de violencia en Libia. Permitir que las mujeres participen en el proceso de elaboración de políticas es fundamental para crear una política que proteja a las mujeres y niñas de la violencia y el daño. Por lo tanto, GICJ apoya la igualdad de oportunidades para ocupar un cargo político sin violencia ni disuasión.

La indiferencia mundial ante el aumento del genocidio

POR KHOA DOAN / GICJ

TRADUCCIÓN ISABEL GARCÍA AGUILAR / GICJ

[Acceso al informe en inglés aquí](#)



El 27 de enero de 2023 se celebró el 18.º Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, también conocido como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 60/7 en noviembre de 2005, por la que se designó por primera vez dicha efeméride.

Raphäel Lemkin, abogado polaco, acuñó el concepto “genocidio” en 1944 en su libro *Axis Rule in Occupied Europe*, a partir del prefijo griego *genos* (raza, pueblo) y el sufijo latino *cide* (asesinato), con el objetivo de responder a los asesinatos sistemáticos contra el pueblo judío durante el Holocausto. La Resolución A/RES/96-I de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el genocidio como crimen del Derecho Internacional en 1946 y se mencionó como un crimen independiente en la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio (Convención sobre el genocidio) en 1948. De acuerdo con el art. 2 de la Convención sobre el genocidio, dicho concepto significa “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: Matanza de miembros del grupo; lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

Contexto

Tras la ocupación alemana en 1938 de Austria y parte de Checoslovaquia, se construyeron torres conmemorativas en lo alto de las colinas en honor de los soldados asesinados durante la guerra. Aunque las estadísticas varían, se estima que se perdieron cientos de miles de vidas judías durante la Segunda Guerra Mundial en los países aliados de Europa, en concreto, tres millones de judíos en Polonia y un millón en URSS. En el comienzo de la guerra y durante su curso, algunas personas ignoraban algunos de los sucesos que habían llevado al estallido de la guerra o no les prestaban especial atención, ya que pensaban que “no tenía nada que ver con ellos”. Hannah Arendt, una de las judías supervivientes de esta oscura época, escribió el libro *La banalidad del mal*, en el que habla sobre el mayor nivel de indiferencia: aquel en el que las personas son cómplices de la maldad y no ven su contribución a la muerte de seis millones de personas judías.

La declaración del pastor Martin Niemöller sobre la Segunda Guerra Mundial fue la siguiente:

Primero vinieron a buscar a los comunistas, y no dije nada porque yo no era comunista.

Después, vinieron a buscar a los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.

Después, vinieron por los judíos, y no dije nada porque yo no era judío.

Después, vinieron a por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que pudiese defenderme.

El 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 60/7 en la que se designó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto y en la que se instaba a todos los Estados miembros a que conmemorasen la memoria de las víctimas del Holocausto. Israel propuso dicha resolución para instar a que otros estados elaborasen programas educativos que inculcasen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. La resolución también concierne sobre todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas. Como acto educativo y conmemorativo, se reivindica la preservación de los lugares que sirvieron de campo de exterminio, campos de concentración, campos de trabajo forzoso y cárceles nazis durante el Holocausto.

“Hogar y pertenencia”, la temática del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto en 2023

La temática de este año refleja la humanidad de las víctimas del Holocausto y los supervivientes que vieron cómo les arrebataban sus hogares y sentimientos de pertenencia durante el régimen. Hubo dos factores principales responsables de la injusticia y discriminación sistémicas que condujeron a los asesinatos genocidas, caracterizados por la desinformación y los discursos de odio. Este día nos recuerda la responsabilidad de conmemorar a las víctimas de estos atroces crímenes y de luchar contra los discursos de odio, el antisemitismo, la distorsión y negación del Holocausto, y el prejuicio para hacer todo lo que podamos para prevenir los genocidios.



Problemas actuales en el mundo

Invasión rusa y la masacre de Bucha en Ucrania

Las noticias sobre la masacre de los soldados rusos contra los ucranianos en Bucha, una pequeña localidad situada en el noroeste de Kiev, a 25 km de esta, ha estado últimamente presente en los medios. Después de que la armada rusa se retirase y que la armada ucraniana volviese para tomar el control del norte de Kiev, se encontraron fosas comunes y cadáveres de civiles por todos los rincones de la ciudad, lo que conmocionó a los funcionarios ucranianos y a los reporteros internacionales que los acompañaban.

Según las declaraciones oficiales de Ucrania, muchos de los cadáveres eran de civiles con sus manos atadas detrás de la espalda, con tiros a corta distancia y con signos de tortura. El 4 de abril de 2022, se encontraron los cuerpos de 410 civiles que habían sido asesinados de esta forma. Las autoridades ucranianas insisten en que esto es una clara señal de los crímenes de guerra que Rusia ha cometido.

Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, ha afirmado que su gobierno propondría un mecanismo especial de justicia para investigar todos los crímenes de guerra cometidos por las milicias rusas en terreno ucraniano.

Dicho mecanismo creará objetividad, legitimidad y la presión internacional adecuada sobre Rusia siempre que este pueda coordinarse con instituciones internacionales que han seguido de cerca la situación en Ucrania en los últimos años, como la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la Corte Penal Internacional (CPI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Masacre de Inn Din en Myanmar

Los asesinatos de Inn Din es la matanza masiva de rohingya perpetrada por el ejército de Myanmar y la población local armada de Rakáin en el pueblo de Inn Din, estado de Rakáin (Myanmar) el 2 de septiembre de 2017. Las víctimas eran miembros del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán. Es la primera vez en la que las fuerzas de seguridad de Myanmar admiten haber asesinado a personas, en lugar de haberlas enjuiciado, en sus “operaciones de limpieza” de la región.

El 1 de septiembre de 2017, muchos de los habitantes que se habían estado escondiendo en las montañas bajaron a las playas de Inn Din para buscar comida. Los soldados armados y los miembros paramilitares llegaron y detuvieron a diez hombres en la playa, a los que acusaron de ser miembros del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán. Según un testigo procedente de Rakáin, los transportaron al colegio de la localidad sobre las 5 de la tarde, los fotografiaron, los vistieron y les dieron su última comida. A la mañana siguiente, los militares hicieron otra foto de los hombres arrodillados en el suelo. Entonces, los soldados les subieron a una colina y les pegaron un tiro en la cabeza. Algunas de las víctimas sobrevivieron y gritaron mientras les enterraban vivas, lo que llevó a un grupo paramilitar local a acuchillarlos con machetes hasta la muerte.

la invasión y ocupación de Irak por parte de EE.UU.

En 2003, Estados Unidos y sus aliados iniciaron una guerra de agresión contra Irak e invadieron su territorio para luego ocupar el país durante más de diez años. Como invasión militar llevada a cabo sin justificación, la guerra contra Iraq se considera una guerra de agresión, que según el Tribunal de Nuremberg no solo es un crimen internacional, sino que es el crimen internacional supremo que contiene en sí mismo el mal acumulado de todo el conjunto. El Estatuto de Roma de la Corte Internacional de Justicia reconoce además la agresión como un crimen internacional. Dado que tuvo un enorme impacto en las vidas de millones de iraquíes y, en última instancia, llevó al país al caos absoluto al que asiste hoy en día, GICJ considera que este se equivale a un genocidio.

Hoy en día, la población de Irak sigue pagando un alto precio por dicha brutal invasión y ocupación: además de los casi tres millones de iraquíes que murieron durante y después de la guerra, millones viven actualmente por debajo del umbral de la pobreza y el número de huérfanos que viven en las calles ha aumentado exponencialmente. La invasión también ha causado enormes cantidades de desplazamientos internos y externos, lo que ha hecho que Irak sea uno de los tres principales países migratorios. Los desplazados internos a menudo viven en la extrema pobreza y son incapaces de satisfacer sus necesidades más básicas.

Desafíos para el futuro

Geneva International Centre for Justice (GICJ) expresa su preocupación porque los genocidios sigan estando muy extendidos en todo el mundo, aunque la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haya hecho énfasis en que la Convención sobre el Genocidio es parte del Derecho internacional consuetudinario general. De esta manera, independientemente de que los estados hayan o no ratificado la Convención, todos están vinculados jurídicamente por el principio de que el genocidio es un crimen prohibido por el Derecho internacional. La CIJ también declaró que la prohibición del genocidio es una norma imperativa del Derecho internacional (o *ius cogens*) y, por lo tanto, no se permite su derogación. Sin embargo, mecanismos como la CIJ sólo pueden, en última instancia, ser eficaces si realmente se utilizan y si otros estados respetan sus decisiones.



En el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto de este año hay que hacer que el mundo recuerde que "debemos comprometernos a nunca ser indiferentes al sufrimiento del resto, a nunca olvidar lo que pasó o dejar que otras personas lo olviden. Nunca debemos bajar la guardia y debemos defender los derechos humanos y dignidad para todos" (António Guterres, secretario general de la ONU).

Se elimina la libertad de culto y hay una obsesión por la estabilidad política en Vietnam

POR KHOA DOAN / GICJ

TRADUCCIÓN ISABEL GARCÍA AGUILAR / GICJ



[Acceso al informe en inglés aquí.](#)

Tras la pandemia de la COVID-19, las autoridades vietnamitas han tendido a endurecer el control sobre las comunidades religiosas, independientemente de la región, sea es montañosa o llana, si están registradas o no, o si son ortodoxas o tradicionales. En mayo de 2022, el tribunal de primera instancia (*district People's Court*) del distrito de Ham Yen, en la provincia de Tuyen Quang, sentenció a 15 personas de etnia hmong seguidoras de Duong Van Minh con una pena de dos a cuatro años de cárcel. Hubo un conflicto con la policía porque el gobierno no devolvió el cuerpo de Duong Van Minh, fundador de dicho grupo y a quien respetaban profundamente. Los detenidos contaron al Departamento de Estado de Estados Unidos que la policía les había torturado sin piedad y les había obligado a renunciar a su religión.

En julio de 2022, seis miembros del grupo étnico Tinh That Bong Lai fueron sentenciados a una pena de entre 3 y 5 años de prisión por abusar de las libertades democráticas con el objetivo de atentar contra los intereses del Estado, los derechos legítimos y los intereses de las organizaciones y los ciudadanos según el art. 331 de su Código Penal. Antes de que la justicia dictase sentencia, se afirmó falsamente que la policía y los medios de comunicación estatales habían actuado fuera de la ley de manera sistemática.

Ese mismo mes, un bautista degar afirmó que unos oficiales del gobierno le habían amenazado con “encargarse de él y oprimirlo” si no fallecía. Sin embargo, mientras que haya un estado fuerte, no podrá hacerlo. La iglesia católica vietnamita afirmó que las autoridades ya no reconocen a los grupos religiosos como se hacía antes, y que cada vez es más difícil registrar las actividades de la región del Altiplano Central y de las provincias del norte. La sangha budista vietnamita lucha con el gobierno por un proyecto sobre la gestión del dinero donado a la religión.



Actualmente, el Comité Gubernamental para Asuntos Religiosos está llevando a cabo el proceso de enmendar las normas sobre la implementación de la ley de libertad de creencias y de religión y está preparándose para emitir un decreto sobre sanciones administrativas sobre religión y libertad de culto, lo que restringirá aún más la libertad religiosa en Vietnam.

A principios de 2022, Vu Chien Thang, viceministro de interior y antiguo director del Comité Gubernamental para Asuntos Religiosos, publicó las directivas sobre la gestión de la religión. Hizo énfasis en “[...] la lucha contra las actividades que se aprovechan de la religión para causar problemas; para desestabilizar en el plano político, la seguridad y el orden; para entender si existe seguridad en temas religiosos, sobre todo, entre minorías étnicas; para luchar contra los grupos religiosos extremistas y contra los ciudadanos que se aprovechan de la libertad de religión para ir contra el Partido o el Estado [...]”.

Seis meses después, Pham Thi Thanh Tra, ministro de interior, ordenó que todas las provincias y ciudades reforzasen la “gestión del Estado” en temas religiosos, entre los que se encuentran los recursos humanos. “Las autoridades deben planear de manera proactiva, seleccionar al personal de las organizaciones religiosas antes de cada congreso, prohibir que charlatanes extremistas tengan posiciones de liderazgo en la iglesia, criticar de manera resolutiva y manejar las violaciones”.

El 2 de diciembre de 2022, Antony J. Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que Vietnam formaba parte de su lista de vigilancia especial sobre libertad de culto. Los últimos informes del departamento de Estado de Estados Unidos y de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional subrayan que la tensión sobre la situación en lo que respecta a la libertad de culto en Vietnam está aumentando. El gobierno ha adoptado continuamente medidas violentas, se ha aprovechado de las provisiones de la ley de libertad de creencias y de religión de 2016 y ha acosado de diferentes formas para eliminar la libertad de culto.



Geneva International Centre for Justice (GICJ) expresa su preocupación sobre el aumento de las restricciones en lo que concierne a la libertad de culto en Vietnam. Durante años, la policía ha utilizado la violencia para eliminar la libertad de culto y ha encarcelado de manera arbitraria a seguidores de todas las religiones. Insta al gobierno de Vietnam a enmendar la ley de libertad de creencias y de religión para que se respete el derecho de cada ciudadano de manifestar sus creencias religiosas en la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

La justicia griega archiva el caso contra los trabajadores humanitarios que rescataban a migrantes

POR JUANITA BELTRAN / GICJ / TRADUCCIÓN ISABEL GARCÍA AGUILAR / GICJ

[Acceso al informe en inglés aquí](#)



“Necesitamos asegurarnos de que la búsqueda y el salvamento estén permitidos, necesitamos asegurarnos de que el derecho a buscar asilo existe” (Seán Binder, buceador de rescate y voluntario con formación en salvamento marítimo). En Grecia, 24 trabajadores humanitarios y voluntarios que se dedicaban a rescatar migrantes de la isla de Lesbos fueron investigados y encausados por presunta trata de personas, blanqueo de dinero y fraude. Espionaje, acceso ilegal a las comunicaciones estatales, contrabando y cooperación para la realización de actividades delictivas son otros de los cargos a los que se enfrentaba el grupo de rescate.

Emergency Response Centre International (ERCI), una ONG dedicada a la búsqueda y salvamento en Lesbos, estuvo ayudando en esta ciudad durante el momento álgido de la crisis de refugiados entre 2016 y 2018, cuando numerosos solicitantes de asilo llegaban cada día a las orillas de Lesbos. El grupo de voluntarios (17 extranjeros y siete griegos) afiliados con ERCI se enfrentaban a una pena de ocho años de prisión.

Elizabeth Throssell, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación sobre dicho juicio antes de su resolución el 13 de enero de 2023. Throssell declaró que este tipo de juicios criminalizan el trabajo de salvar vidas y establecen un peligroso precedente contra el trabajo de los defensores de derechos humanos y las organizaciones humanitarias en Grecia y otros países de la Unión Europea.

Uno de los trabajadores humanitarios condenados es Sarah Mardini, refugiada, nadadora y hermana de una de las integrantes del equipo de natación de refugiados en los Juegos Olímpicos de 2016 y 2021. Tanto Sarah Mardini como Sean Binder, buceador y también condenado, pasaron tres meses en la cárcel de Lesbos por delitos en los que se incluían espionaje, uso ilegal de frecuencias de radio y fraude. Todavía se les está juzgando por otros cargos, entre los que se incluyen ciertos delitos graves y tráfico de personas.

Sin embargo, se han admitido en el juicio las objeciones de los abogados de la defensa en las que se argumentaban que había fallos en el proceso, como el hecho de que los escritos de acusación no se hubiesen traducido para los encausados extranjeros y que los cargos por espionaje fuesen poco concretos (1). Por lo tanto, el caso se ha archivado. Este proceso es un claro ejemplo de cómo la búsqueda y salvamento de migrantes puede poner en riesgo las vidas de multitud de migrantes que también están buscando un futuro mejor. Con la criminalización del trabajo de los rescatistas, los estados pretenden ilegitimar los derechos humanos, sobre todo, los de los migrantes y refugiados de todo el mundo. El número de salvadores que temen continuar con su trabajo debido a los cargos contra el grupo de voluntarios no para de aumentar.

Los estados deberían trabajar mano a mano con los defensores de los derechos humanos y los salvadores para poder superar la crisis de migrantes y refugiados.



Geneva International Centre for Justice (GICJ) acoge la decisión de archivar el caso tomada por el tribunal griego. Aunque solo sea un pequeño paso, es un avance en favor de la justicia para todos los migrantes y refugiados. Sin embargo, condena las violaciones de los derechos humanos contra el derecho a buscar asilo y, de manera general, contra los derechos de los migrantes. Insta a los estados a que conciencien y desmonten los prejuicios contra los migrantes y sus contribuciones en la sociedad. Además, urge a Grecia que pare de oponerse a las personas que luchan por los derechos humanos y que son solidarias con los migrantes. Recomienda asimismo ofrecer trabajos que sean legales y seguros a los rescatadores de migrantes.

La sentencia de Jimmy Lai y el deterioro de la libertad de expresión en Hong Kong

POR KHOA KHOA / GICJ / TRADUCCIÓN JUANITA BELTRÁN/ GICJ

[Acceso al informe en inglés aquí](#)

"Defender la libertad de expresión es un trabajo peligroso. Es nuestra responsabilidad como periodistas buscar justicia", escribió Lai desde la cárcel. Jimmy Lai, magnate de Hong Kong, fundó en 1995 el periódico prodemocrático *Apple Daily*. El periódico se empeñó en informar sobre noticias de especial relevancia dentro de China continental que han enfurecido al Partido Comunista Chino (PCC). El *Global Times*, periódico estatal chino, calificó a Lai de "traidor" por su "descarada confabulación" con Occidente y le acusó de alimentar las recientes protestas en Hong Kong. Lai había utilizado su libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental, implicándose en actividades democráticas y reuniéndose con varios funcionarios de Occidente, como el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado de Seguridad, Mike Pompeo.

El 30 de junio de 2020, el régimen chino impuso en Hong Kong la Ley de Seguridad Nacional. Esta ley establece el máximo de cadena perpetua para actividades que el Estado considere subversivas, sectarias o terroristas, y aplica prohibiciones estrictas en torno a la colusión con fuerzas extranjeras. En consecuencia, Lai fue detenido y acusado de fraude relacionado con el arrendamiento de un edificio donde se ubicaba el *Apple Daily*. También fue acusado como sospechoso de colusión con fuerzas extranjeras y de poner en peligro la seguridad nacional en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. El 8 de febrero de 2021, el Tribunal de Última Instancia de Hong Kong le denegó la libertad bajo fianza al señalar que el tribunal inferior había seguido una "línea de razonamiento errónea".

En abril y mayo de 2021, Lai fue encarcelado durante 28 meses por participar en asambleas no autorizadas durante las revoluciones de los paraguas amarillos de 2019. Posteriormente, el *Apple Daily* se vio obligado a cerrar en junio de 2021, el redactor jefe y otros cinco ejecutivos fueron detenidos, y se congelaron todos los activos vinculados a la empresa. El cierre ha deteriorado la libertad de expresión en Hong Kong, recogida en la Ley Fundamental tras su devolución a China desde el Reino Unido.

El hijo de Lai ha pedido al Reino Unido que intervenga en su condena de 5 años, debido a que Lai es titular de un pasaporte británico. Sin embargo, el gobierno de Hong Kong declaró: "Nunca toleraremos, y deploramos enérgicamente, cualquier forma de injerencia de cualquier potencia o individuo extranjero en los procedimientos judiciales y los asuntos internos de la RAEHK". Los países occidentales, incluido Estados Unidos, han expresado su preocupación por la difícil situación de Lai y han denunciado lo que califican de deterioro generalizado de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en virtud de una Ley de Seguridad Nacional impuesta por China. La portavoz del primer ministro Rishi Sunak, Anne-Marie Trevelyan, se había reunido con el equipo jurídico de Lai y apoyaba los derechos y libertades y el estado de derecho en Hong Kong.



Geneva International Centre for Justice (GICJ) expresa su preocupación ante el deterioro de la libertad de expresión en Hong Kong. La sentencia de Jimmy Lai fue considerada arbitraria irrespetando la ley fundamental de 1997. Instamos al gobierno de Hong Kong a reconsiderar la ley de seguridad nacional para respetar el derecho al acceso de información y el derecho de cada individuo a buscar y obtener información en poder de las autoridades públicas. Los jueces de Hong Kong deben respetar el estado de derecho y liberar a Jimmy Lai inmediatamente.

¿Quiénes Somos?

GICJ

Es una organización no gubernamental independiente e internacional sin fines de lucro dedicada a la promoción y fortalecimiento del compromiso por los principios y normas de derechos humanos. El GICJ tiene sus oficinas en Ginebra, Suiza y se rige por el Código Civil suizo y sus estatutos. Basando su trabajo en las reglas y principios del Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el GICJ observa y documenta violaciones a los derechos humanos y busca justicia para las víctimas a través de todos los medios legales disponibles.

Misión:

La misión del GICJ es mejorar vidas enfrentando violaciones y cualquier otra forma de violencia y trato inhumano o degradante mediante el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos; el refuerzo de la independencia de jueces y abogados; la consolidación de los principios de equidad y no discriminación; el afianzamiento del imperio de la ley; la promoción de una cultura de conciencia sobre los derechos humanos; y el combate de la impunidad.

Trabajo:

El GICJ ha venido abordando temas de justicia y rendición de cuentas desde que fue establecido. Las Naciones Unidas y sus correspondientes mecanismos de derechos humanos son clave en nuestro trabajo. El GICJ participa extensamente en estos mecanismos, en particular el Consejo de Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal.



Red: el GICJ mantiene vínculos con varias ONGs, abogados y una vasta red dentro de la sociedad civil alrededor del mundo. A través de estas vías, el GICJ puede recibir documentación y pruebas sobre abusos y violaciones a derechos humanos a medida que ocurren en distintos países. El GICJ continúa acercando esta información a los órganos pertinentes de la ONU a fin de obtener justicia para todas las víctimas.



Haga una donación a GICJ

Desde su creación, el centro Geneva International Centre for Justice (GICJ) ha documentado violaciones de los derechos humanos, y ha denunciado estos abusos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y otros organismos de derechos humanos.

Por favor, considere hacer una contribución al centro GICJ en cualquier momento. ([Aquí](#))

Puede donar cómodamente a través de **PayPal** o mediante transferencia bancaria utilizando la información que se muestra a continuación. Lo invitamos a navegar por [nuestra web](#) para que pueda conocer más acerca de nuestro trabajo de defensa de derechos humanos, y llevando a perpetradores ante la justicia. Le damos las gracias de antemano por su apoyo.

Donaciones por transferencia bancaria:

Geneva International Centre for Justice

Información bancaria: PostFinanceNordring 83030 Bern, Suiza

Número de cuenta: 12-188643-0

IBAN: CH02 0900 0000 1218 8643 0

Código Swift: POFICHBEXXX

Donaciones a través de PayPal

Si tiene algún problema o desea realizar una donación de otra manera, no dude en contactarnos en

info@gicj.org



Su contribución es importante para la promoción y protección de los Derechos Humanos.

Encuentranos en

